

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Auto interlocutorio

Santiago de Cali, tres de diciembre de dos mil veinte (2020).

Magistrado Ponente: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ASUNTO:	Proceso ejecutivo
REFERENCIA:	76001-23-33-000-2018-01003-00
ACCIONANTE:	MIRELLA OSPINA QUINTERO
ACCIONADO:	UGPP.

AUTO QUE DECIDE NO AVOCAR COMPETENCIA.

Recibido el presente proceso ejecutivo remitido por el Juzgado octavo Administrativo de Cali instaurado por MIRELLA OSPINA contra la UGPP por competencia por conexidad el despacho procede a resolver avocar o no el mismo.

I. ANTECEDENTES

La demandante presentó el 24 de julio de 2015 demanda ejecutiva en contra de la UGPP con fundamento en la sentencia de este despacho del 6 de mayo de 2005.

**Posición del octavo Administrativo Mixto del Circuito de Cali.** Una vez recibido el expediente, dictó auto del 29 de septiembre de 2015 rechazando la demanda y ante decisión de este tribunal mediante auto del 21 de marzo de 2018 libro mandamiento de pago, notificándose la demanda a la entidad ejecutada.

Posteriormente, la mencionada autoridad judicial mediante auto del 8 de agosto de 2018 declara su incompetencia por el factor de conexidad, remitiendo a este tribunal el proceso allegado el 17 de octubre de 2019 y puesto a consideración del despacho en el mes de septiembre de 2020.

II. CONSIDERACIONES

En los procesos ejecutivos radicados bajo la Ley 1437 de 2011 (CPACA) en los que el título de ejecución era en una condena judicial ejecutoriada, e impuesta en vigencia del estatuto procesal anterior (D-L 01 de 1984), esta Corporación venía sosteniendo, como criterio general, que aquellos tienen un carácter autónomo e independiente del proceso declarativo primigenio donde fue proferida la sentencia a ejecutar, de suerte que su reparto se debe surtir sin atender criterio de conexidad alguno, tal y como si se tratara de un asunto nuevo sometido a examen de la jurisdicción contenciosa, conforme a las normas de competencia del actual estatuto procesal.

También, afirmó que cuando la ejecución se fundamentara en una condena judicial proferida en vigencia del actual CPACA, podía darse aplicación al principio de conexidad, entendido bajo la máxima de que “*el juez de conocimiento es el juez de la ejecución*”, principio que se materializa, entre otros, en los artículos 104<sup>1</sup> 156<sup>2</sup>, 298<sup>3</sup> y 299 inciso 2<sup>4</sup> del CPACA.

Tal fue el criterio general que sostuvo la Sala Plena de esta Corporación en distintas providencias<sup>5</sup> pero ante el pronunciamiento unificador de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se acogió a la tesis vertida en el auto del 25 de julio de 2016, en el que se exaltó el factor conexidad en materia de distribución de competencias establecidas en la Ley 1437 de 2011, para conocer de la ejecución de la sentencia a continuación del proceso ordinario que la origina, artículos 297, 298 y 299 del CPACA, norma que considera aplicable también a la ejecución de las sentencias proferidas en vigencia del anterior ordenamiento (Código Contencioso Administrativo)<sup>6</sup>:

**“(…) 3.2.5. Conclusiones.**

*En relación con la ejecución de las sentencias de condena a entidades públicas, se concluye lo siguiente:*

**a.** *Las sentencias judiciales tienen un procedimiento especial de ejecución que se sigue a continuación del proceso en el cual se origina el título, cuya regulación parte de los artículos 306 y 307 del CGP, y se complementa con las reglas propias del proceso ejecutivo previsto en el artículo 422 y siguientes del mismo estatuto.*

**b.** *Para ello y en el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, quien obtenga una sentencia de condena a su favor puede optar por:*

1. Iniciar el proceso ejecutivo a continuación del ordinario, para lo cual debe:

Formular demanda para que se profiera el mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo expuesto en la parte resolutive de aquella y en la cual se incluyan los requerimientos mínimos indicados en el aparte 3.2.4., de esta providencia.

<sup>1</sup> Ley 1437 de 2011 “**Artículo 104.** De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo... 6. *Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción...*”

<sup>2</sup> Ley 1437 de 2011 “**Artículo 156.** Competencia por razón del territorio. *Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:*

(...) 9. *En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva.*”

<sup>3</sup> Ley 1437 de 2011 “**Artículo 298.** Procedimiento. *En los casos a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior [condenas judiciales ejecutoriadas], si transcurrido un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.* (...)” (Subraya la Sala)

<sup>4</sup> Ley 1437 de 2011 “**Artículo 299.** De la ejecución en materia de contratos y de condenas a entidades públicas. *Salvo lo establecido en este Código para el cobro coactivo a favor de las entidades públicas, en la ejecución de los títulos derivados de las actuaciones relacionadas con contratos celebrados por entidades públicas, se observarán las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil para el proceso ejecutivo de mayor cuantía.*

*Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en la liquidación o pago de una suma de dinero serán ejecutadas ante esta misma jurisdicción según las reglas de competencia contenidas en este Código, si dentro de los diez (10) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia la entidad obligada no le ha dado cumplimiento.* (...)” (Subraya la Sala)

<sup>5</sup> Ver entre otras: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Plena: Providencia de febrero 7 de 2013, Rad. 2012-00038-00. MP. Oscar Alonso Valero Nisimbat, providencia de noviembre 20 de 2013, Rad. 2013-00006-00. MP. Oscar Alonso Valero Nisimbat, Providencia de marzo 30 de 2016, Rad. 76001-33-31-015-2015-00112-01 MP. Zoranny Castillo Otálora.

<sup>6</sup> C. de E. Sección Segunda, Subsección “A”. Auto interlocutorio (IJ) de julio 25 de 2016. Radicación 11001-03-25-000-2014-01534-00 (4935-14). CP. Dr. William Hernández Gómez. Demanda ejecutiva. Actor: José Arístides Pérez Bautista. Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Es decir, el hecho de que se inicie el proceso ejecutivo a continuación del proceso ordinario no quiere significar que se pueda presentar sin ninguna formalidad y el ejecutante está en la obligación de informar si ha recibido pagos parciales y su monto.

En este caso no será necesario aportar el título ejecutivo, pues este ya obra en el proceso ordinario.

El proceso ejecutivo se debe iniciar dentro del plazo señalado en los artículos 192 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 306 y 307 del Código General del proceso.

2. Si lo prefiere el demandante, puede formular demanda ejecutiva con todos los requisitos previstos en el artículo 162 del CPACA, a la cual se debe anexar el respectivo título ejecutivo base de recaudo, es decir, la sentencia que presta mérito ejecutivo con todos los requisitos de forma y de fondo exigidos por la ley.

En este caso el objetivo será que la sentencia se ejecute a través de un proceso ejecutivo autónomo de conformidad con el Libro Tercero, Sección Segunda, Título Único del Código General del Proceso, relativo al proceso ejecutivo, en aplicación de la remisión normativa regulada por el artículo 306 de la Ley 1437 de 2011.

*c. En cuanto al punto relacionado con la competencia, en ambos casos la ejecución debe tramitarla el juez que conoció el proceso **en primera instancia**, así este no haya proferido la sentencia de condena; lo anterior, con el fin de preservar los objetivos perseguidos con el factor de conexidad ya analizado.*

*d. Cuando se trate de títulos ejecutivos diferentes a la providencia judicial, la competencia sí se define por el factor cuantía previsto en los ordinales séptimos de los artículos 152 y 155 del CPACA. Tal es el caso de (i) un laudo arbitral, puesto que los árbitros no tienen competencia para la ejecución de sus providencias; (ii) los derivados de los contratos estatales que comprende la ejecución de los actos administrativos expedidos en su ejecución.*

*En estos casos, por no existir un juez contencioso administrativo del que provenga el título, será menester determinar la competencia con base en este criterio; esto es, si la cuantía excede de los 1500 salarios mínimos legales mensuales vigentes el asunto corresponderá al tribunal, de lo contrario, será de conocimiento de los juzgados administrativos.*

*e. Todo lo anterior difiere de la solicitud de requerimiento para el cumplimiento de la condena al pago de sumas de dinero prevista en el artículo 298 del CPACA en armonía con los ordinales 1º y 2º del artículo 297 ib.*

### **3.2.6 Cuestiones accesorias frente a la tesis adoptada.**

*Realizadas las anteriores precisiones, es oportuno señalar que en el campo de aplicación de las normas a las que ya se hizo referencia, se pueden presentar los siguientes eventos al momento de determinar la competencia para conocer de un asunto:*

*a) Puede ocurrir que el Despacho que profirió la sentencia de condena haya desaparecido para el momento en que regresa el expediente del trámite de segunda instancia, caso en el cual la competencia la asumirá el que corresponda de acuerdo con la redistribución o reasignación que se haya dispuesto de los asuntos que este conocía, por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura.*

*b) Si el proceso se encuentra archivado y ocurre la desaparición del despacho que profirió la condena, la competencia para conocer del proceso ejecutivo le corresponderá*

*a aquel que se determine de acuerdo con el reparto que efectúe la oficina encargada de ello, en el respectivo Circuito Judicial o Distrito Judicial, según el caso.*

*c) Ahora bien, en el caso de los procesos fallados en vigencia del régimen anterior, esto es, el Decreto 01 de 1984, pero cuya ejecución se inició bajo las previsiones del CPACA, el procedimiento a seguir es el regulado en este último y en el CGP, puesto que, pese a que la ejecución provenga del proceso declarativo que rigió en vigencia del Decreto 01 de 1984, el proceso de ejecución de la sentencia es un nuevo trámite judicial.*

*Lo anterior porque, aunque se realiza a continuación y dentro del proceso anterior, tiene características propias y diferentes, en tanto que además de que originalmente no es de carácter declarativo, en el mismo se pueden presentar excepciones que originan un litigio especial que da lugar a un nuevo fallo o sentencia judicial (Art. 443 ordinales 3º, 4º y 5º del CGP).*

De conformidad con los lineamientos expresados por el Consejo de Estado, se entiende que en tratándose de ejecución de providencias judiciales, será competente para conocer de la demanda, el juez de primera instancia que haya proferido la decisión.

Sin embargo, como en precedencia se señaló **el Juzgado octavo Administrativo Mixto del Circuito de Cali**, una vez recibido el expediente, y sin formular su incompetencia, dictó auto de mandamiento de pago, notificando la demanda a la UGPP y esta entidad contesto la demanda.

En este sentido se debe señalar que el inciso 2 del Artículo 16 del CGP señala que la falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguirá conociendo del proceso.

### III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, en Sala Unitaria de decisión,

#### RESUELVE:

**PRIMERO.** NO AVOCAR el presente proceso ejecutivo y devolver el mismo al Juzgado octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, competente para conocer del presente asunto, por prorrogabilidad de la misma, conforme a lo referido en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO.** Por Secretaría de la Corporación, **REMÍTASE** el proceso al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali para su conocimiento, previas las anotaciones de rigor.

**TERCERO.** Anótese su salida y cancélese su radicación.

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE**

**JHON ERICK CHÁVES BRAVO  
MAGISTRADO.**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop at the top and a long, sweeping stroke that extends downwards and to the left, crossing itself.